



Proceso	Verbal
Demandante	Gestoría Ltda y Cía S.C.A. en Liquidación
Demandado	Edificio Altobelo P.H.
Radicado	05001-31-03-015-2021-00363-01
Instancia	Segunda
Procedencia	Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín
Ponente	Luis Enrique Gil Marín
Asunto	Interlocutorio No. 041
Decisión	Confirma
Tema	Nulidad procesal
Subtemas	Requisitos para alegar la nulidad. Los hechos que constituyen excepciones previas no se pueden hacer valer como nulidad. Notificación previa al demandante por estados del auto que admite la demanda.

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín (Ant.), treinta de marzo de dos mil veintitrés

I. OBJETO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto proferido el 04 de abril de 2022, por el **JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN**, mediante el cual negó la nulidad deprecada en el proceso declarativo de Responsabilidad Civil, promovido por

GESTORIA LTDA Y CIA S.C.A. EN LIQUIDACION en contra del **EDIFICIO ALTOBELO P.H.**

II. ANTECEDENTES

Por auto del 04 de abril de 2022, el juzgado negó la nulidad formulada por la parte demandada, con soporte en los argumentos que se pasa a exponer.

Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia (art. 133-1) porque la audiencia de conciliación prejudicial que se allegó como requisito de procedibilidad, la suspende para el 15 de enero de 2013 y, posteriormente, fija como fecha para llevarla a cabo el 25 de enero, sin que en ambos casos exista prueba del año, con lo cual el centro de conciliación expide la constancia No. 2846, que no se debe tener como válida para acreditar el requisito de procedibilidad porque no cumple con los requisitos del art. 2º de la Ley 640 de 2001, en la que indica como fecha de celebración de la audiencia 21 de diciembre de 2012, 15 y 25 de enero de 2012; es decir, que la supuesta segunda y tercera audiencia se celebraron antes de la primera; así mismo porque el interesado que convocó a la audiencia es el señor Gabriel Giraldo Vergara con C. de C. No. 8.251.414, quien no ha probado su calidad con respecto a la sociedad demandante; indicando que esa solicitud de audiencia por un tercero que nada tiene que ver con el proceso, no es admisible.

Como las mismas causales de nulidad y argumentos consignados, también sirvieron de soporte al recurso de

reposición que la parte demandada interpuso en contra del auto que admitió la demanda; para la resolución trae los mismos argumentos que allí fueron consignados, donde indicó:

"... Considera el juzgado con respecto a dicha Acta de Audiencia de Conciliación Prejudicial, y a la Constancia No. 2846, que el hecho de no indicar en forma expresa la palabra "CONSTANCIA" o "ACTA", no le resta mérito al documento, para ser tenido como tal, cuando de su contenido se puede constatar que efectivamente corresponde a un ACTA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, Y LA CONSTANCIA DE LA MISMA.

"Igualmente, y tal como quedó implícito al admitir la demanda, la diligencia de conciliación prejudicial que se aportó por la parte demandante, si cumple con las exigencias de la ley 640 de 2002, es claro que, contrario a lo manifestado por la recurrente dicho documento es EL ACTA DE CONCILIACIÓN que exige la ley, y que además cumple las disposiciones legales, tal como se explica a continuación.

"Con respecto al artículo primero de dicha preceptiva, se tiene que se encuentran expresamente señalados en el documento el lugar, la hora y la fecha de la audiencia; allí se puede observar en el encabezamiento de la misma, que la solicitud se presentó el 17 de diciembre, aunque no indica el año, claramente se advierte del radicado, y de la fecha de celebración de la misma, que tuvo lugar en el año 2012.

"Ahora, el hecho de que se haya numerado con lapicero la mencionada acta, no la convierte ipso facto en inválida, y si lo pretendido es demostrar una presunta invalidez o alteración del mismo, deberá acudirse a la tacha de falsedad, sin embargo, dicha tacha solamente procede cuando el documento impugnado tenga fuerza para la decisión que deba tomarse en el proceso, tal como lo preceptúa el artículo 269 del Código General del Proceso. Pero se itera, el hecho de la anotación a mano, y con lapicero del número del acta, en nada afecta su validez.

"Tampoco es de recibo para el Despacho, lo manifestado sobre la "informalidad" del centro de conciliación de que se queja la recurrente, pues dicho ente tal como se desprende del mismo documento de conciliación, fue creado el 1º de marzo de 2004, por medio de la Resolución No. 0282, otorgada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, tal como también se puede consultar en el directorio de centros de conciliación de la página del Ministerio de Justicia, lo cual fue corroborado por este juzgado, en donde efectivamente se observa que dicho centro de conciliación, está autorizado por dicho ministerio, para la realización de dichas audiencias.

"Respecto a la suspensión de dicha audiencia "para el 15 de enero de 2013", y luego para el 25 de enero, sin que se especificara el año, encuentra este juzgador, que a pesar del error al indicar el año como 2012, en nada incide en la esencia misma del documento, ni estos tienen la virtualidad de transformarla en inválida, pues recuérdese que no puede prevalecer la forma sobre lo sustancial, y que las altas Cortes, siempre han proclamado que el exceso ritual manifiesto, no

puede dar lugar a dicho privilegio, dando al traste con lo sustancial, lo esencial de cualquier acto, y por un apego extremo y mecánico a las formas, renunciando a lo que en verdad es importante dentro del proceso; obviamente tampoco yéndose al otro extremo, esto es, que de no hallarse la formalidad, ni siquiera en forma incipiente, su exigencia es un requisito sine qua non para la validez del acto al que accede. ...”.

Precisa que en ningún momento se ha declarado la falta de jurisdicción o competencia y, en cambio, el juzgado considera que se allegó legalmente el requisito de procedibilidad, estima infundada esta causal de nulidad.

Sobre la causal “*Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite integralmente la respectiva instancia*”, con el argumento de que el Despacho esta actuando en un proceso donde las partes ya transaron y caducó la acción y, por ende, hace tránsito a cosa juzgada; la parte demandante anexa como prueba diligencia de conciliación, del 21 de diciembre de 2012, que no sirve como documento de conciliación prejudicial, pero si sirve como prueba de confesión para demostrar que el tercero Gabriel Giraldo Vergara de que los hechos que pretende conciliar ocurrieron durante los años 2011 y 2012 y que para cuando se presentó la demanda había transcurrido más de diez años y, que procede la caducidad de la acción y/o prescripción de la acción; igualmente, manifiesta que se presentó un contrato de transacción, donde se lee y por ende se entiende como conexión de la parte demandante, que los hechos objeto de la

demanda son del 13 de agosto de 2004 y que prueba que existe prescripción del derecho y caducidad de la acción.

Al efecto, indica que, al resolver la reposición, consideró:

"Pretende la recurrente, se declare que los hechos por los que se demanda, ya fueron transados y por ende, hacen tránsito a cosa juzgada, ello con base en el documento adosado con la demanda, denominado CONTRATO DE TRANSACCIÓN, en donde efectivamente, y a pesar de que el documento no tiene fecha de emisión, ni de suscripción del mismo, se observa que lo transado (numeral 2º Contenido del Acuerdo), refiere a: "Las partes manifiestan que dan por terminada de común acuerdo la diferencia existente entre ellos, consistente en: a) Que Gestoria Ltda. Y Cía S.C.S. (en liquidación) debe a agosto 31 de 2004, a la copropiedad la suma de \$14.098.400 y la copropiedad debe a Gabriel Giraldo la suma de \$8.132.136,00, por concepto de reparación de humedades provenientes de las fachadas del Edificio Altobelo ...". (resalto del Despacho)

"Esto es, la transacción corresponde a hechos ocurridos en el año 2004. Así mismo, en el mismo documento (numeral 1. Objeto), se indicó: "Con el presente contrato las partes acuerdan transar las obligaciones surgidas de la relación entre los copropietarios de los inmuebles del Edificio altobelo (sic) y la administración del mismo con Gabriel Giraldo Vergara y de este con los copropietarios y la administración de los inmuebles del Edificio Altobelo, así mismo, precaven de manera extrajudicial, todo litigio eventual que tenga como causa cualquier obligación surgida de la relación de

*copropiedad existente entre ellos hasta la fecha.”
(nuevamente resalto del juzgado).*

“Igualmente, en el numeral 4 (Efectos del acuerdo), quedó claro que “... las partes acuerdan dar por terminadas todas las diferencias existentes hasta la fecha...” (negrilla y subrayas de este juzgado)

“Concluyéndose entonces que el contrato a que se hace referencia, tuvo lugar, “al parecer” por allá en el año 2004, y su objeto fue transar las diferencias entre las mismas partes aquí en litigio, por hechos acaecidos en aquella época, que se indica en el mismo contrato, y hasta ese momento. No cobijando hechos a futuro. Por tanto, lo narrado en la demanda presentada en noviembre de 2021, son hechos que nada tienen que ver con dicha transacción, y por tanto, tampoco estos que nos ocupan tienen el carácter de cosa juzgada. ...”.

Así mismo precisa, que no existe decisión del superior ni fue anexada por la parte demandada; tampoco encuentra que se haya pretermitido la instancia, puntualizando que el proceso apenas está en su inicio; ni advierte que haya revivido un proceso legalmente concluido; no advirtiendo la configuración de causal de nulidad.

En cuanto a la nulidad *cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder*, porque la abogada Gloria Inés Velásquez Jiménez no cuenta con poder debidamente otorgado por la sociedad GESTORIA LIMITADA Y

CIA S.C.A (EN LIQUIDACION), otorgado a través del correo electrónico registrado en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, como imperativamente lo establece el art. 5º del Decreto 806 de 2020; precisa que como la sociedad no tiene correo electrónico, el poder otorgado por la liquidadora desde el correo electrónico adianadejesushernandezvargas@gmail.com, no cumple los requisitos legales, no es válido y es inexistente, por lo que debió otorgar el poder conforme el art. 74 del C. General del Proceso, normativa que se encuentra vigente.

Para resolver, igualmente trajo los argumentos para despachar el recurso de reposición, en los siguientes términos:

"El artículo 5º del Decreto 806 de 2020, es del siguiente tenor literal:

"Artículo 5. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.

"En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.

"Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales."

"Normativa que no requiere de elucubraciones científicas para desentrañar su sentido o tenor literal, pues es de fácil comprensión, y se limita a señalar en forma "imperativa", la forma como a partir de dicho Decreto, se pueden allegar los poderes a un proceso, ello, sin desconocer o derogar el contenido del Código General del Proceso en su artículo 74.

"Así entonces, la norma transcrita es clara en disponer en su inciso 1º, que los poderes especiales, como el que aquí es objeto de reparo, se pueden conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.

"Pues bien, con respecto a este primer inciso, encuentra el Despacho que el poder allegado con la demanda, cumple en forma plena y expresa con los mismos, pues fue otorgado a la abogada GLORIA INES VELASQUEZ JIMENEZ, desde el correo electrónico de la liquidadora de la entidad demandante, inclusive, sí tienen firma manuscrita, tanto de la poderdante-liquidadora de la demandante- como de la apoderada, y además en forma expresa, se indica el correo electrónico de la apoderada, cumpliendo en esto con el inciso segundo de dicho artículo.

"Ahora, no puede el Juzgado obligar a la parte demandante a remitir un poder desde su dirección de correo electrónico, porque según se constata del certificado de existencia y representación de dicha empresa, NO TIENE CORREO ELECTRÓNICO, por tanto, es imposible que lo envíe desde allí.

"Siendo la señora ADRIANA HERNANDEZ VARGAS, la liquidadora de dicha sociedad, según se desprende del mismo certificado de existencia y representación de la entidad, es quien actúa como administradora y representante legal de la misma, según establece el numeral 2.2.2.11.1.3 del Decreto 2130 de 2015, que expresamente dispone: "Del cargo de liquidador. El liquidador es la persona natural que actúa como administrador y representante legal de la entidad en proceso de liquidación. El liquidador deberá cumplir las cargas, deberes y responsabilidades previstas en el Libro Segundo del Código de Comercio, la Ley 1116 de 2006 y en el presente decreto". En la misma preceptiva se establece que este cargo de liquidador, debe ser ejercido por personas naturales.

"Considera este juzgado, que el hecho de remitir el poder desde su correo electrónico la liquidadora, en nada vicia la legalidad del mismo, ya que en el cuerpo de aquel, se dejó claramente estipulado: "obrando en calidad de liquidador en designación de la sociedad GESTORIA LIMITADA Y CIA SCA (EN LIQUIDACIÓN), y que además, dicha calidad también aparece acreditada en el certificado de existencia y representación, y que además la entidad designada no cuenta con correo electrónico para notificaciones.

"En este caso, el poder enviado desde el correo electrónico de la liquidadora de la sociedad demandada, tiene plena validez conforme al artículo 5º del decreto citado, pues el hecho de no contar una entidad comercial con correo electrónico de notificaciones, no puede dar pie a que se le deniegue el derecho de acceso a la administración de justicia, por no

poder remitir el poder desde aquel correo electrónico inexistente.

"Para este juzgador es claro, que el poder fue otorgado y remitido con las formalidades prescritas en el artículo 5º del Decreto 806 de 2020, por tanto, ello exonera a la poderdante, GESTORIA LIMITADA Y CIA SCA (EN LIQUIDACIÓN), por medio de su liquidadora, de otorgarlo de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso, pues la legislación no prevé que en caso de no poder otorgarse desde la dirección de correo electrónico de la persona inscrita en el registro mercantil, por no tener dicho instrumento, tenga que otorgarse conforme al Código General del Proceso.

"Es que dicho artículo, el 74 de la preceptiva en cita, permite incluso que pueda conferirse un poder en forma verbal en audiencia o diligencia, denotando con ello, que lo que se busca, ya sea en el decreto 806 del 2020, o en el Código General del Proceso, es simple y llanamente que el juez pueda tener certeza de quien, esto es, que persona otorga un poder, y a quien se lo otorga.

"Y en este caso, es claro que el poder lo otorga la entidad demandante, por medio de su liquidadora; y que al no contar con una dirección de correo electrónico la demandante, la liquidadora, como representante legal de la misma, calidad que se itera se encuentra acreditada, lo envió desde su correo personal, situación que no vulnera las normas relativas al otorgamiento y remisión del poder, tal como lo hemos analizado.

"Y no es porque el juzgado pretenda "flexibilizar" las normas, como lo indica en forma expresa la recurrente, sino que no hay que buscar el significado de una norma sino dentro del espíritu mismo de ella, cuando es tan clara y lo que busca es facilitar el acceso de todos a la administración de justicia.""

Y finalmente, frente a la nulidad *"Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas indeterminadas"*, precisa que, a diferencia de las anteriores, no se alegó en el recurso de reposición.

Como soporte expone que el auto que admitió la demanda se notificó por estado el 23 de febrero de 2022, alcanzando ejecutoria tres días después, el 28 de febrero de 2022; la abogada de la demandante remitió notificación personal a la demandada por correo electrónico; es decir, notificó una providencia que aún no se encontraba ejecutoriada y, no se podía tener como válida por ser extemporánea como lo dispone el art. 289 y que la providencia notificada no producía efectos a esa fecha; que tampoco se dio cumplimiento al penúltimo párrafo del at. 6° porque la demanda se inadmitió y no se remitió a los demandados el cumplimiento de requisitos a su correo electrónico, entonces velando por el cumplimiento de este requisito, se debe inadmitir nuevamente.

Para resolver, luego de transcribir apartes del art. 6° del decreto 806 de 2020, expresa que la normatividad ordena que simultáneamente con la presentación de la demanda al Juzgado, el demandante debe enviar copia de la misma y sus anexos a los demandados y, que si lo anterior es cumplido, la

notificación solo se limita al envío del auto admisorio de la demanda; preguntando que perjuicio genera para la parte demandada, cuando el auto admisorio se le envíe inmediatamente se notifica o dentro del término de ejecutoria; respondiendo que ninguna, siempre que la notificación quede bien realizada; siempre que los demandados se enteren en debida forma tanto de la demanda y sus anexos, como del auto que admitió la demanda y se respeten los términos del traslado; que en tratándose del saneamiento de la *nulidad*, el numeral 4º del art. 136, indica en forma expresa que *"... la nulidad se considerará saneada cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa"*; lo que se cumple en este caso; que el hecho de realizar la notificación dentro del término de ejecutoria, ningún perjuicio se deriva y el derecho de defensa no se ha sido conculcado.

Con sustento en los anteriores argumentos el Juzgado negó la nulidad invocada por la parte demandada.

La parte demandada interpuso el recurso de reposición y, en subsidio apelación, contra la anterior decisión, con el siguiente soporte.

(i) *"Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia"*. Al tener por valido un documento que no cumple con los requisitos de una *"constancia de no acuerdo de una conciliación prejudicial"*, estaría actuando en un proceso sin contar con la jurisdicción o competencia para dictar sentencia, ya que los hechos y pretensiones previamente deben ser conciliados por un

conciliador, entendiendo este como otro tipo de jurisdicción y es necesario que el juez decrete la nulidad. Se queja porque el Juzgado indica que no puede acoger formalismos exagerados, indicando que la interpretación no puede ser excesivamente laxa y errada, respecto a la poca formalidad que debe cumplir la elaboración de las actas de conciliación, indicando que por exigencia del art. 90 del C. General del Proceso, es un requisito para admitir la demanda. Expone que el despacho debe decretar la nulidad y rechazar la demanda.

(ii) Incluso, afirma que el acto no tiene validez como conciliación, pero si como confesión, donde da cuenta que los hechos ocurrieron hace más de diez (10) años, indicando que como los hechos tuvieron ocurrencia hace más de 17 años, está probado claramente que existe prescripción del derecho y caducidad de la acción como lo dispone el art. 2536 del C. Civil.

(iii) Falta de poder de la parte demandante. El Despacho niega la nulidad indicando que la sociedad demandante GESTORIA LIMITADA Y CIA. S.C.A. (EN LIQUIDACION) al no tener un correo electrónico inscrito en el registro mercantil, faculta al representante legal para que desde el correo personal pueda conferir poder especial conforme el art. 5º del Decreto 806 de 2020, lo que no es indicativo de que no se pueda otorgar el poder en la forma prescrita en el art. 74 del C. General del Proceso; lo que considera una interpretación excesivamente flexible. Puntualiza que es obligatorio conferir el poder desde el correo inscrito en el registro mercantil y a renglón seguido, reconoce que la demandante allí no tiene reportado ningún correo; advirtiendo que el poder otorgado

desde el correo adrianadejesushernandezvargas@gmail.com de la liquidadora Adriana Hernández Vargas al correo de la señora abogada no es válido por no cumplir con los requisitos legales; que tenía que otorgar el poder en los términos del art. 74 del C.G.P. Colige que el Despacho debió rechazar la demanda.

(iv) En cuanto a la debida notificación de la admisión de la demanda, luego de retomar los argumentos del Juzgado, advierte que si bien es cierto que el demandado fue notificado en debida forma conforme el art. 8º del decreto 806 de 2020; nuevamente pone de presente que la demanda se admitió el 21 de febrero de 2022, se notificó por estados del 23 de igual mes; por lo tanto, el auto quedaría ejecutoriado el 28 de febrero de ese mismo año, a las 17:00 P.M., indicando que solo se entiende que materialmente existe auto cuando se encuentra ejecutoriado; la abogada de la demandante remitió notificación personal el 28 de febrero de 2022, es decir que notificó una providencia que aún no estaba ejecutoriada y, por lo tanto, no se podía tener como válida por ser extemporánea; es necesario que se decrete la nulidad.

Seguidamente trae en extenso unos apartados denominados “LEGALIDAD Y APLICACIÓN NORMA PROCESALES”, “PRECEDENTE JUDICIAL / INDICIO” y como documento escaneado agregó el proyecto de ley de 2021, sobre conciliación con la exposición de motivos.

Por auto del 4 de abril del año anterior, negó el recurso de reposición. En esencia volvió sobre los mismos argumentos expuesto al resolver al recurso de reposición soportado en las

mismas causales y los consignados al resolver el recurso de nulidad. En subsidio, concedió el recurso de apelación.

Es pertinente precisar, que con posterioridad la parte demandada por conducto de su apoderado judicial, envió escrito para que sea tenido en cuenta, reiterando los argumentos consignados al formular el recurso y a lo largo de las actuaciones.

III. CONSIDERACIONES

El art. 102 del C. General del Proceso, establece: ***“Inoponibilidad posterior de los mismos hechos. Los hechos que configuran excepciones previas no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones”.***

Y el art. 135, que consagra los requisitos que se deben cumplir para invocar la nulidad, puntualiza: *“No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo la oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.*

“La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada.

“El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo

o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación”.

En este caso, como es evidente que los hechos que soportan las causales de nulidad invocadas, tipifican excepciones previas en los términos del art 100 del C. General del Proceso, siendo este el único mecanismo que tenía la parte demandada para hacerlas valer, como expresamente lo manda el art. 102 que viene de transcribirse; pues a pesar de que tuvo la oportunidad para hacerlo, la desperdició; lo que pone de presente que la nulidad invocada desde el inicio se tenía que rechazar de plano.

Es pertinente poner de presente, que las mismas causales que se invocaron para invalidar la actuación, con excepción de la indebida notificación, sirvieron de soporte para impugnar en reposición el auto que admitió la demanda; de donde la utilización de distintos mecanismos para hacer valer las mismas inconformidades, no solo es redundante; sino, que además constituye una estrategia para entorpecer la celeridad con la que el proceso debe ser tramitado, conducta reprochable; pues se erige en una causa más, que contribuye a la congestión de la Rama Judicial, por la enorme carga de trabajo que día a día se incrementa.

Mención especial, merece la indebida notificación del auto que admitió la demandada a la pasiva, porque tuvo lugar cuando aún no se había ejecutoriado, argumento que no tiene ningún asidero o soporte legal; al efecto, el art. 296 del C. General del Proceso, establece que *“El auto admisorio de la demanda*

y el mandamiento ejecutivo se notificarán por estado al demandante antes de su notificación personal o por aviso al demandado”; de donde claramente, se advierte que la formalidad exigida consiste en que previamente se debe notificar al demandante por estados, circunstancia que es bien diferente a que dicha providencia esté ejecutoriada.

De lo anterior se colige, sin necesidad de ahondar en otras argumentaciones, que se impone la confirmación del auto recurrido.

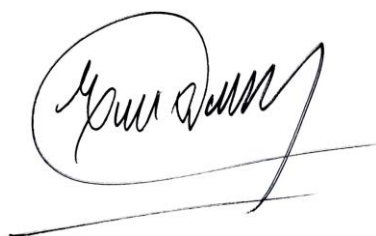
IV. RESOLUCION

A mérito de lo expuesto, **LA SALA SEGUNDA DE DECISION CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN,**

R E S U E L V E

- 1.** Confirmar el auto de fecha y procedencias indicadas, por lo dicho en la parte motiva.
- 2.** Se ordena devolver la actuación al juzgado de origen.

COPIESE Y NOTIFIQUESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Gil Marin', with a long horizontal stroke extending to the right.

LUIS ENRIQUE GIL MARIN
Magistrado